

DICTADURAS MILITARES Y REPRESIÓN EN EL CONO SUR: UNA PERSPECTIVA SINCRÓNICA Y REGIONAL¹

Mariana Joffily²
Gabriela Águila³

Resumen: El trabajo analiza las dictaduras militares en el Cono Sur de América Latina (1960 – 1990) desde una perspectiva regional y conectada. La elección de la escala regional –que integra herramientas de la historia comparativa y transnacional– permite la reposición del factor cronológico y de los fenómenos sincrónicos, que suelen ser ignorados por la perspectiva comparativa. Se analizan, además, los casos nacionales como experimentos que, en su desenlace, influenciaron en alguna medida las decisiones de los gobiernos dictatoriales vecinos. Se examinan las características comunes y las particularidades de los regímenes en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, así como los procesos de represión, coordinación regional y las consecuencias de las transiciones democráticas. Se evidencia cómo la memoria colectiva y las narrativas sociales influyen en la interpretación de estos periodos, además de señalar las relaciones de rivalidad y colaboración entre los países del Cono Sur. Finalmente, se plantea que comprender estas dictaduras como un fenómeno regional, en interacción constante con las especificidades nacionales, permite una visión más profunda y completa de sus dinámicas y efectos históricos.

Palabras clave: dictaduras militares; violencia estatal y represión; cono sur y movimientos de coordinación; memoria y justicia; transiciones democráticas

1 Publicado originalmente en *Cartografías de la represión en América Latina. Historias comparadas y conectadas de la violencia estatal (1960-1990)* (coords. Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo Scatizza), Buenos Aires, Imago Mundi, 2024. Derechos cedidos por la editorial y las autoras para su publicación en SED.

2 Professora de História, Universidade do Estado de Santa Catarina. <https://orcid.org/0000-0002-2332-672X>

3 Académica de la Universidad Nacional de Rosario. <https://orcid.org/0000-0002-4747-3345>

Introducción

Gran parte de los estudios y las interpretaciones sobre las dictaduras del Cono Sur producidas entre los años setenta y ochenta se asentaron en una perspectiva comparada. Desde los trabajos de Guillermo O'Donnell (1982; 1997) sobre el estado burocrático autoritario como matriz analítica para definir a las dictaduras de los sesenta, pasando por las interpretaciones que postulaban el carácter fascista o semi – fascista de los regímenes militares brutalmente represivos de los setenta o aquellas que las caracterizaron como fenómenos autoritarios de “nuevo tipo” (Lvovich, 2023), hasta los estudios sobre las transiciones a la democracia de los años ochenta. Sociólogos y politólogos de diversas vertientes inscribieron a las dictaduras en un ciclo de carácter regional y construyeron modelos de interpretación ampliamente influyentes, registrando tanto la contemporaneidad de esos procesos como sus rasgos comunes y haciendo mayor o menor hincapié en ciertos elementos estructurales o coyunturales –tales como el papel jugado por los Estados Unidos y el impacto de la guerra fría en el área, la influencia ideológica del anticomunismo o la doctrina de la seguridad nacional, los procesos de reestructuración capitalista o la crisis del keynesianismo y el estado de bienestar. Por su parte, en los años 2000, fueron los estudios sobre la memoria los que recuperaron la dimensión comparativa para analizar la configuración de procesos memoriales o la manera en que las sociedades latinoamericanas tramitaron pasados “traumáticos”, signados por la violencia política y estatal, contrastando estos casos con otras experiencias post – autoritarias, en particular de la Europa de entreguerras y con el Holocausto como paradigma (Jelin *et al.*, 2002 – 2005).

Las perspectivas macroanalíticas de matriz sociológica o politológica –y con ellas el sesgo comparativista–, fueron perdiendo centralidad a medida que los historiadores se afianzaron en el estudio de esos períodos y procesos, introduciendo cambios en los abordajes, las problemáticas analizadas y las escalas de observación, así como en las interpretaciones sobre las dictaduras. Tal como lo muestran un amplio conjunto de investigaciones producidas en los países del Cono Sur basadas en un riguroso trabajo sobre fondos documentales y archivos; en la apertura de temas y problemas inexplorados en los análisis más tempranos y en los renovados debates acerca de la naturaleza de las dictaduras, los comportamientos sociales o la violencia represiva, por solo citar algu-

nos. La cuestión de las escalas de análisis ha ocupado parte de la reflexión metodológica sobre los modos de hacer historia del pasado reciente, muy acusadamente en el caso argentino pero también visible en otras historiografías de la región. El cuestionamiento a perspectivas centralistas (“porteño — céntricas”) y poco atentas a las variaciones locales y regionales, se expresó en la preferencia por achicar el foco de análisis con la consiguiente expansión de los estudios de caso o la historia local (Águila, 2021; Scatizza, 2016), mientras que —como ha apuntado Silvina Jensen para la historia de los exilios—, también se vienen desarrollando indagaciones que apelan a enfoques y perspectivas relacionales, tales como la Historia Transnacional, la Historia Conectada, la Historia Cruzada, la Historia Global y la nueva Historia Comparada (Jensen, 2021).

Además de la fértil línea de estudios sobre las memorias de las dictaduras, en la última década y media se publicaron trabajos que recurrieron a la estrategia comparativa para analizar las dictaduras militares de los años sesenta y setenta, así como los procesos de violencia que las denotaron en temporalidades de corto, mediano o largo plazo (Alonso, 2013; Franco e Iglesias, 2015; Lastra, 2016; Gomes, 2016; Lvovich, 2020); algunas obras colectivas que recogen y sistematizan indagaciones y reflexiones que involucran distintas escalas de análisis (Bohoslavsky *et al.*, 2010; Ramírez y Franco, 2021; Lvovich y Patto Sá Motta, 2022), así como investigaciones que ponen el foco en las dimensiones regionales y transnacionales de aquellas experiencias autoritarias, en particular cuando se analizan los exilios políticos, las redes de denuncia de los crímenes cometidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del activismo transnacional de los derechos humanos (Jensen 2021; Alonso, 2022) y, asimismo, los estudios sobre las experiencias de coordinación represiva a escala regional conosureña, latinoamericana e incluso internacional (Padrós y Slatman, 2014; Fernández Barrio y Rodríguez Tizón, 2020; Rostica, 2020; Chirio y Joffily, 2020; Fernández Barrio, 2022).

En un trabajo previo (Águila y Joffily, 2022), en el que abordamos las dictaduras de Brasil y Argentina y la represión en clave comparada, definimos como estrategia analizar cada experiencia nacional y establecer paralelismos a partir de referentes comunes: el contexto en el cual sucedió el golpe, la legislación de excepción, la organización del aparato represivo, los represores y los “blancos” hacia los que se dirigió la violencia,

los apoyos de la sociedad civil, el giro hacia la transición a la democracia. Ese ejercicio comparativo nos permitió comprender fenómenos que se escapan en las perspectivas puramente nacionales; sin embargo, tiende a desdibujar la dimensión cronológica que, sin ser absoluta, comporta elementos de explicación e incluso interrogantes que no pueden ser descuidados. En esta perspectiva, este trabajo se propone pensar las dictaduras como un fenómeno regional, de modo a explorar más las influencias y contrainfluencias que cada proceso nacional pudo ejercer sobre los demás. El ejercicio implica acompañar, década a década, algunos de los hitos que tuvieron fuerte impacto nacional y/o importancia para todas las dictaduras, pero que suceden en momentos distintos de la periodización interna de cada una, además de explorar algunas conexiones entre ellas.

La elección de la escala regional⁴ —que integra herramientas de la historia comparativa y transnacional— permite la reposición del factor cronológico y de los fenómenos sincrónicos, que suelen ser ignorados por la perspectiva comparativa, sobre todo por el hiato existente entre el inicio de la dictadura brasileña y los de los países vecinos. Abre espacio, además, para el abordaje de los casos nacionales como experimentos que, en su desenlace, influenciaron en alguna medida las decisiones de otros gobiernos dictatoriales.

Los sesenta

Los años sesenta en Brasil y Argentina sobresalieron por una novedad: el quiebre del paradigma intervencionista militar de corta duración en la política civil, fenómeno significativo de la relación civil — militar a lo largo del siglo XX en los dos países. Los golpes de 1964 en Brasil y 1966 en Argentina, en ambos casos autodenominados como “revolución”, tuvieron como característica el pasaje del modelo de intervención circumscripta al derrocamiento de un determinado gobierno hacia un esfuerzo de más largo aliento centrado en la erradicación de fuerzas políticas consideradas una amenaza para el orden político y social⁵. El cambio se

4 En un texto de 2014, Enrique Serra Padrós y Melisa Slatman lo plantearon, hablando de un ciclo de dictaduras del Cono Sur entre 1964 y 1990, pero su foco siguió siendo la comparación entre las dictaduras de Argentina y Brasil de 1964 y 1976 (Serra Padrós y Slatman, 2014).

5 Nos referimos a la comparación con las intervenciones y golpes de 1937, 1945,

produjo al interior de la dictadura brasileña y fue prontamente adoptado por la argentina.

Organizado por una amplia coalición civil – militar, el derrocamiento del presidente João Goulart (1961 – 1964) no comportaba un proyecto dictatorial consistente, sino que se fue dibujando según las disputas entre civiles y militares, mientras que las crisis intramilitares evolucionaron hacia soluciones autoritarias, apuntando a la institucionalización del nuevo orden (Martins Filho, 1996). Aunque el Acto Institucional tomara su autoridad del mismo movimiento golpista y se haya presentado como resultado de la voluntad de la nación, indicaba una fecha de finalización –enero de 1966– y preveía elecciones directas poco antes del final de su período de vigencia. El intervalo transcurrido entre el golpe y el Acto Institucional n° 2, dictado en octubre 1965, marcó el giro de una injerencia estricta en el orden político hacia una intervención más profunda, que incluso impidió que dirigentes políticos civiles golpistas sucedieran a los militares en el gobierno y los alejó de las instancias decisorias del poder “revolucionario”.

La “Revolución argentina” de junio de 1966, inspirada por el golpe de 1964 en su intento de “eliminar” la política” y tomando en cuenta la experiencia brasileña, ya irrumpió en “en la escena con una intención refundacional del país, ‘sin plazos sino metas’” (Gomes, 2016, pp. 35 – 37), cambiando la tradición golpista precedente. Ya no se trataba de mediar en las crisis políticas civiles, sino que de situarse como actor social protagónico en los cambios pretendidos. En este escenario, las elecciones democráticas fueron consideradas por los militares de los dos países como posibles elementos de inestabilidad. En el caso brasileño eso sucedió tras el golpe, cuando la victoria de candidatos de partidos opositores en algunos estados en octubre de 1965 –pese a la enmienda constitucional que impedía algunas candidaturas⁶– contribuyó a que el gobierno militar considerara problemáticas las elecciones presidenciales previstas para el año siguiente. En el caso argentino, esta cuestión se presentó como

1954, 1955 y 1961 en Brasil y 1930, 1943, 1955 y 1962 en Argentina.

6 Fueron electos: en Guanabara Francisco Negrão de Lima, mediante una coalición entre el Partido Social Democrático (PSD) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); en Minas Gerais, Israel Pinheiro, por el PSD; en Santa Catarina, Ivo Silveira, del PSD; en Mato Grosso, Pedro Pedrossian, del PSD.

uno de los elementos que llevaría al quiebre constitucional: se temía una victoria peronista en las elecciones de marzo de 1967, lo que reforzaría a esta corriente política en las elecciones presidenciales de 1969.

Otra característica que acerca a las dos dictaduras de los sesenta es la falta de una resistencia significativa a la toma de poder por los militares. Durante el golpe, hubo un número muy reducido de muertos en Brasil, mientras en Argentina los golpistas fueron caracterizados irónicamente por el *Buenos Aires Herald* cómo “los revolucionarios mejor educados de América Latina” (citado en Fico, 2008, p. 57). Por otro lado, si el gobierno militar brasileño, aún aislado en la región, se preocupó en preservar su imagen, manteniendo con restricciones el funcionamiento de instituciones democráticas y a dos partidos políticos en actividad, la Junta Militar argentina se apresuró a disolver los partidos y destituir a los miembros del Congreso, de la Suprema Corte y a los gobernadores de provincias. Onganía explicó a Castelo Branco que los argentinos no cometerían el mismo “error” que los golpistas brasileños, y que habrían de cerrar las dos fuentes de corrupción que para él representaban la clase política y el Poder Judicial. Es decir, la dictadura argentina de 1966, observando a su congénere, la superó, empezando desde el inicio con un proyecto más ambicioso de permanencia en el poder y permitiéndose un grado más de audacia autoritaria. Para Carlos Fico, por lo tanto, el caso brasileño fue tomado como un “anti – modelo” (Fico, 2008, pp. 69 – 88).

Hubo también un aprendizaje por parte del gobierno de Estados Unidos. Muy involucrada en el golpe brasileño –que apoyó organizando a la Operación *Brother Sam*– y reconociendo prontamente al gobierno golpista –lo que más tarde reconocería como una decisión precipitada–, la diplomacia estadounidense se mostró menos entusiasmada con el golpe argentino, aunque el general Onganía fuera adepto a la Doctrina de Seguridad Nacional. Lincoln Gordon, que actuó en tanto que embajador brasileño como un aliado de primera hora de los golpistas, se opuso al quiebre de la “ruptura de la constitucionalidad y del proceso democrático”, además de manifestar la visión de que “el golpe militar sería un grave revés para el desarrollo económico y político de Argentina” (citado en Fico 2008, p. 62). La situación era considerablemente distinta: “Aunque el mismo Goulart no fuera de ninguna manera un revolucionario, Illia estaba lejos de sostener un programa de reformas sociales y de política

externa que lo acercara a un Goulart” (Rapoport y Laufer, 2000, p. 81). La dictadura brasileña, por su parte, pese a su cercanía en el período con los Estados Unidos, mostró su independencia y no tardó en declarar su apoyo a los militares argentinos, retribuyendo al rápido reconocimiento del gobierno que había destituido a João Goulart dos años antes. El movimiento, además de un gesto de autoprotección contra comunistas y peronistas, terminó por convencer a los estadounidenses para que dejaran de lado sus volátiles inquietudes democráticas y volvieran al pragmatismo característico de su política exterior (Fico, 2008, p. 54).

Paradojalmente, en los años siguientes, la situación se invirtió. El Acto Institucional n° 5 (AI – 5), decretado en diciembre de 1968, generó cierta preocupación de los agentes del Departamento de Estado por remover una parte considerable de las apariencias liberales de la dictadura brasileña. En el sentido contrario, la dictadura argentina era evaluada con complacencia: se consideraba que el reemplazo de los jueces no había perjudicado a la independencia del Poder Judicial, la prensa era poco censurada y las características del gobierno de Onganía no eran las típicas de un militar (Fico, 2008, p. 66). De hecho, los ciclos de protestas observados en los dos países tuvieron derivaciones opuestas. Las marchas de estudiantes y las huelgas obreras a lo largo del año 1968 resultaron en un endurecimiento de la dictadura brasileña, mientras que el ciclo de movilizaciones urbanas masivas, iniciado en 1969 —que incluyeron al Cordobazo, los Rosariazos y el Viborazo— contribuyeron a la crisis del régimen de Onganía (Serra Padrós y Slatman, 2014).

La perspectiva comparada/regional nos permite señalar la ironía del hecho de que la “revolución” brasileña, inicialmente prevista para derrocar a João Goulart y garantizar la elección de un presidente “aceptable” para las élites civiles y militares, se convirtió en una dictadura de veintidós años, mientras que la argentina, que se proponía a ir mucho más lejos en términos de promoción de un cambio radical, solo duró un tercio del período sin ser capaz de operar las transformaciones enunciadas.

En el otro espectro ideológico, la segunda mitad de los años sesenta fue testigo del ciclo de emergencia de organizaciones de izquierda armada que se organizaron bajo influencia de la revolución cubana, que incluyeron al Movimiento de Liberación Nacional (MLN Tupamaros) en Uru-

guay, formalmente constituido en 1965, pero con acciones precedentes; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) surgido en 1965 en Chile; Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) y Acción de Liberación Nacional (ALN), organizadas hacia 1968 en Brasil y Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP), que hicieron su aparición pública en 1970 en Argentina. El caso brasileño se diferencia de los demás, porque las organizaciones guerrilleras se crearon y operaron todo el tiempo bajo dictadura, originadas de la constatación de que el camino pacífico defendido por el Partido Comunista no era una opción válida, como lo comprobaba el mismo golpe⁷. En la escala nacional, el ingreso a la lucha armada fue considerado tardío, porque ya no era posible impedir que las fuerzas conservadoras tomaran el poder (Gorender, 1984, p. 87). Pero a escala regional, el fenómeno es contemporáneo a otros grupos. La gran diferencia residía en que los otros movimientos contaron con algún espacio de desarrollo y actuación, mientras los grupos brasileños se formaron en una coyuntura en la cual, tras un proceso de “ensayo y error” (Gorender, 1984, p. 141), los militares se habían decidido por un endurecimiento del régimen institucionalizando la legislación de excepción y estructurando un extenso aparato represivo⁸.

Considerando que las guerrillas fueron un argumento poderoso en los países del Cono Sur para generar adhesión a los procesos golpistas, cabría preguntarse por qué Brasil inauguró el ciclo de las dictaduras de seguridad nacional de la región, sobre todo si llevamos en cuenta que no había grupos de izquierda armada en el país y que el presidente Goulart, aunque popular, provenía de una familia de terratenientes y estaba lejos de proponer una agenda revolucionaria ¿Serían las élites brasileñas menos tolerantes a la polarización en el país de la “cordialidad” y menos propensas a correr riesgos que sus homólogas vecinas? La precocidad brasileña en el tema puede ser un elemento explicativo de la preocupación por mantener ciertos aspectos de la institucionalidad liberal, si bien expurgados, mutilados y controlados; su esfuerzo de legaliza-

7 En Argentina las organizaciones armadas más importantes también surgieron en dictadura, durante el gobierno del general Onganía; pero siguieron actuando luego de 1973, cuando se restableció la democracia. Estaban, en consecuencia, operando antes del golpe de 1976.

8 De ahí el icónico título de la obra de Jacob Gorender “Combate en las tinieblas”.

ción del orden autoritario, igualmente un intento de normalización, y un número menor de víctimas de la represión estrictamente política (en comparación con los países vecinos, sobre todo considerada en relación con las poblaciones).

Parte importante de la primera oleada de exiliados políticos brasileños —constituida inmediatamente después del golpe por simpatizantes o altos miembros del gobierno de Goulart, intelectuales y militantes de los partidos de izquierda proscriptos— eligió a Montevideo como nueva morada, lo que convirtió a la ciudad en “el gran polo de concentración, la capital del exilio” (Rollemberg, 1999, p. 50). Además de la cercanía y de la tradición democrática, había una historia de conexiones culturales, políticas y económicas del país con el estado brasileño de Rio Grande do Sul, lo que permitía un flujo de contactos que preocupaba la dictadura brasileña (Serra Padrós, 2014, p. 98).

En su actuación en Uruguay, Pio Corrêa, el embajador brasileño y su adjunto militar, implantaron las bases de funcionamiento de lo que sería más tarde el Centro de Informaciones del Exterior (CIEx), un “esquema represivo que utilizó la red de embajadas y consulados como plataforma de monitoreo y actuación contra los exiliados” (Serra Padrós, 2014, p. 99). A fines de 1967, la presión ejercida por los militares brasileños sobre las autoridades uruguayas para vigilar a los exiliados y frenar a las denuncias internacionales al autoritarismo, que ya había obtenido algunos resultados, logró superar las resistencias del país vecino. La ascensión al gobierno uruguayo de Jorge Pacheco Areco en 1967, el aumento de la conflictividad social y la nueva ola de exiliados brasileños tras el Acto Institucional n° 5 en diciembre de 1968, fueron factores determinantes para que se produjera una “nueva escalada de colaboración represiva, ahora con marcas de reciprocidad” (Serra Padrós y Slatman, 2014, p. 12). La presencia del exilio brasileño en Uruguay y posteriormente en Chile (sobre todo después de la elección de Salvador Allende) seguramente constituyó un elemento importante para la preocupación que demostraron las autoridades brasileñas en influir en los desenlaces políticos de los países vecinos.

Los setenta

Los años sesenta llegaron a término en una coyuntura de polarización política agudizada por el icónico año 1968, marcado en toda la región por confrontaciones entre sectores estudiantiles y obreros y los gobiernos, incluso bajo las dictaduras brasileña y argentina —aunque en el último caso la explosión de la protesta social se remonta a 1969—. Los setenta aportaron la contraofensiva conservadora. En Brasil se iniciaba la fase de exterminio, con el pleno desarrollo del aparato represivo, el denominado Sistema de Seguridad e Informaciones, incluso con la instalación de centros clandestinos de tortura y muerte. Uruguay caminaba desde 1968 rumbo a una democracia autoritaria, con la instauración del estado de excepción para lidiar con los conflictos internos y una presencia más efectiva de los militares en la política (Franco e Iglesias, 2011, pp. 96 – 101). En Argentina, la dictadura reprimió con fuerza a los movimientos sociales y las acciones de los grupos guerrilleros fueron combatidas mediante el uso de una represión violenta e ilegal. El corto período democrático transcurrido entre fines de la dictadura de 1966 y el golpe de 1976 (v.g. marzo de 1973 a marzo de 1976) estuvo fuertemente marcado por la conflictividad política.

En Uruguay y Argentina, los períodos democráticos previos a los golpes constituyeron una especie de ensayo represivo de las dictaduras de seguridad nacional, con el recurso a leyes de excepción, ataques y secuestros a militantes de izquierda, torturas, desapariciones, masacres —prácticas que se volverían todavía más abundantes y sistemáticas después de los golpes—. La saña empleada en el combate a los grupos guerrilleros era diametralmente opuesta a la complacencia con las acciones de las ultraderechas: en Uruguay, un escuadrón de la muerte actuaba al interior del Ministerio del Interior (Serra Padrós y Simões, 2012, p. 31), mientras que la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) era financiada por el Ministerio del Bienestar Social del gobierno peronista. En este sentido, es posible decir que los gobiernos de Uruguay —desde 1968, pero sobre todo a partir de 1971— y Argentina —donde el retorno del peronismo no significó un giro a izquierda, sino todo lo contrario— estaban más cercanos, en términos de prácticas de control social y de ideología, de la dictadura brasileña que de la democracia chilena.

De hecho, Chile vivía el último coletazo del impulso de cambio de los sesenta: el proyecto de la vía pacífica para el socialismo se convirtió en foco de la atención internacional hacia su experimento político. La elección de Salvador Allende galvanizó las fuerzas progresistas de la región, tornándose un campo de observación no sólo de las izquierdas conosureñas, sino también de las de otras regiones. La oleada de exiliados brasileños posteriores al Acto Institucional n° 5, compuesta mayoritariamente de estudiantes y militantes de las organizaciones guerrilleras, se dirigió en buena parte hacia el país trasandino, constituyendo una gran preocupación para el gobierno brasileño (Rollenberg, 1999, p. 50).

A los cambios protagonizados por el gobierno de la Unidad Popular en Chile y las acciones de las organizaciones clandestinas de izquierda en la región —secuestros de figuras vinculadas a la represión, asesinatos, robos a bancos, acciones de propaganda política—, las fuerzas reaccionarias contestaron con un creciente anticomunismo, la militarización de la seguridad interior y propaganda en la prensa contra el “enemigo interno”, en una espiral de violencia que conduciría al desenlace autoritario. Para los Estados Unidos, Chile se había convertido en una importante amenaza de éxito de los ideales revolucionarios, un peligro todavía más nocivo por proponer un cambio radical al interior del paradigma democrático, y ejemplo a ser combatido con el auxilio de las dictaduras aliadas de Brasil y Argentina⁹. Si bien el resultado de las elecciones parciales, realizadas en marzo de 1973, demostraría la fuerza de la Unidad Popular, el gobierno chileno era asimismo fuertemente combatido por las clases dirigentes del país y se encontraba evidentemente aislado del resto de la región.

El gobierno brasileño de turno buscó actuar como un actor regional en la promoción de transformaciones autoritarias. Los intercambios en materia de contrainsurgencia en la región se remontan por lo menos a

9 Cuando se estaba preparando el golpe de Estado en Chile, en Argentina ya se habían realizado las elecciones democráticas, en marzo de 1973. De hecho, el gobierno peronista presidido por Héctor J. Cámpora (mayo-septiembre de 1973), restauró las relaciones diplomáticas con el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, la Argentina reconoció al gobierno de Pinochet luego de producido el golpe, y el presidente Juan D. Perón recibió al dictador chileno en Buenos Aires en mayo de 1974.

la década anterior, con el Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria ofrecido por la Escuela Superior de Guerra argentina en 1961, que contó con la presencia de representantes de todo el continente americano. Posteriormente, Brasil se convertiría en un centro regional de difusión de su amalgama de la Doctrina de Seguridad Nacional y la teoría de la guerra revolucionaria francesa, recibiendo militares de los países vecinos en el Centro de Instrucciones de Guerra en la Selva (CIGS) —fundado poco antes del golpe de 1964 por un coronel que había frecuentado cursos en la Escuela de las Américas, en Panamá—, y en la Escuela Nacional de Informaciones (EsNI) —creada en 1971 para formar personal especializado en el área de inteligencia—. En ese entonces Brasil era el único país en la región con una incontestable experiencia de terreno en el campo de la guerra antisubversiva y una estructura represiva construida bajo los preceptos de las teorías contrainsurgentes de moda.

La presencia de miembros de la comunidad de informaciones brasileña en Uruguay y sus vínculos con la derecha uruguaya contribuyeron a deteriorar la democracia en ese país, a la vez que fueron factores decisivos para que los Tupamaros eligieran secuestrar en 1970 al cónsul brasileño Aloysio Dias Gomide, junto al agente estadounidense Dan Mittrione —quien incluso había actuado entrenando agentes represivos brasileños—. La iniciativa se inspiró en el intento de secuestro del embajador estadounidense en Brasil por grupos guerrilleros el año anterior, sin obtener resultados. El presidente uruguayo Pacheco Areco no se mostró dispuesto a negociar, a diferencia de la Junta Militar brasileña que fue presionada por los Estados Unidos para hacerlo. En esa ocasión el gobierno estadounidense tampoco se mostró favorable a la negociación, temiendo que otros agentes pudieran ser blanco de acciones de la misma naturaleza en distintas partes del mundo. Dias Gomes permaneció ocho meses secuestrado hasta que se pagó su rescate, mientras que Mittrione fue asesinado (Serra Padrós, 2014, p. 104 – 105).

Brasil y Argentina compartían con los Estados Unidos la preocupación de que lo que había sucedido en Chile pudiera repetirse también en Uruguay, donde en 1971 se había creado el Frente Amplio reuniendo a distintas fuerzas de izquierda dispuestas a competir contra los tradicionales partidos blanco y colorado. El tema fue parte de diversas correspon-

dencias diplomáticas y encuentros entre las autoridades de los tres países. El gobierno de Argentina, pese al apoyo manifestado por Onganía, no estaba dispuesto a intervenir en las elecciones uruguayas, aunque se mostró dispuesto a apoyar un autogolpe de Pacheco Areco en el caso de que el Frente Amplio lograra éxito. No está totalmente claro el rol que tuvo Brasil en dicho evento, pero hubo algunas denuncias de parte de sectores de la izquierda uruguaya, además de una serie de indicios.

Eduardo Galeano, conocido periodista y escritor uruguayo, acusó al agregado militar brasileño en Montevideo de haber sido enviado para armar una red del Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) (CNV, 2014, I, p. 199). El semanario *Marcha* publicó denuncias sobre el despliegue de militares brasileños en la frontera (Silva, 2023, p. 181). El gobierno brasileño planificó la Operación Treinta Horas, un plan de invasión del país, en el caso de que la victoria del Frente Amplio se verificase (Serra Padrós, 2014, p. 106). Un policía secuestrado por los Tupamaros mencionó que agentes uruguayos involucrados en atentados promovidos por grupos paramilitares habían seguido cursos en Brasil (Gaspari, 2003, p. 194). La información sería complementada por el ex – embajador brasileño Pío Corrêa, quien explicaría, tiempo después, que la embajada brasileña llegó a distribuir armamentos y explosivos a grupos de extrema derecha y que el Servicio Nacional de Inteligencia de Brasil había colaborado con grupos anticomunistas, agentes de seguridad y militares uruguayos (Silva, 2023, p. 185). A su vez, el ex agente de la CIA, Philip Agee, aludió a la presencia de inversiones brasileñas en la campaña electoral de Bordaberry (Silva, 2023, p. 183) y el mismo Richard Nixon, en conversación con el primer ministro británico, comentó que “Los brasileños ayudaron a manipular las elecciones uruguayas...”¹⁰.

Antes de que empezara el período más autoritario en Uruguay, el director del Instituto Militar de Estudios Superiores entre 1964 y 1966, José Luis Ramagli, convirtió en base de la formación de los oficiales uruguayos lo que había aprendido en los años precedentes en la Escuela de Comando y Estado Mayor brasileña sobre la Doctrina de Seguridad

10 Memorando secreto de Henry Kissinger sobre un encuentro del presidente Richard Nixon con el primer ministro británico Edward Heath, 20 de diciembre de 1971. National Security Archives. Electronic Briefing Book N° 71. Disponible en: <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB71/indexesp2.html>.

Nacional (Cuadernos del Centro de Estudios Estratégicos del Uruguay, citado en Chirico, 1995, p. 29). En los años setenta, las policías de los dos países operaban en conjunto en la región fronteriza, con detenciones en territorio uruguayo bajo solicitud del gobierno brasileño (Gaspari, 2003, p. 352). Una vez producido el golpe de Estado, en junio de 1973, entre los vehículos militares que ocuparon Montevideo estaban los que el gobierno militar brasileño enviara a los militares uruguayos, quienes también contaban con la generosa oferta de remesas de combustible en caso de paro en las refinerías petroleras (Gaspari, 2003, p. 351).

La participación de Brasil en el golpe chileno, tema más investigado, fue aún más profunda e incluyó un amplio abanico de modalidades:

“El hábitat natural de la intervención brasileña en Chile era el subterráneo. En él, Brasil se enredaría con grupos chilenos de extrema derecha, incluyendo al neofascista Patria y Libertad; se prepararía para una guerra civil en Chile; coordinaría acciones con militares que preparaban el golpe; lideraría una campaña regional para aislar Allende; infiltraría a la comunidad de exiliados brasileños; daría garantías a conspiradores contra ambiciones territoriales del régimen peruano. Depuesto el gobierno socialista chileno, la dictadura brasileña ayudaría en la consolidación de un régimen militar en Santiago —fuera vendiendo armamento, entrenando agentes de la represión chilena o protegiendo al vecino suramericano en foros internacionales—” (Simon, 2021, p. 16).

Brasil no actuó como una mera pieza de ajedrez de los Estados Unidos, sino siguiendo sus propios intereses regionales, coincidentes con los de la potencia del norte. La presencia de Vernon Walters —el adjunto militar que participó de la conspiración que orquestó el golpe en Brasil, promovido a subdirector de la CIA— en las conversaciones entre Richard Nixon y el dictador Emílio Médici para discutir la intervención brasileña en las elecciones uruguayas, así como su posterior encuentro con Manuel Contreras —el jefe de la policía política de Augusto Pinochet en el año siguiente al golpe en Chile—, demuestran las convergencias y el grado de articulación transnacional de las fuerzas conservadoras (Joffily, 2018, p. 69).

La tradición comparativamente profesional y apolítica de las fuerzas armadas uruguayas y chilenas —distintas de las de Brasil y Argentina— no impidieron los golpes de 1973, lo que señala un movimiento histórico que trascendió las trayectorias nacionales. Las fuerzas armadas de los países de la región habían sufrido, en los años precedentes y en ritmos distintos, un proceso de ideologización y depuración interna en favor de los defensores de las estrategias contrainsurgentes. Los embates ideológicos de la guerra fría y las doctrinas militares creadas para responder a aquel contexto contribuyeron a generar proyectos y solidaridades políticas transnacionales, que en alguna medida insertaron las luchas políticas locales en una escala global.

Mientras el golpe en Uruguay significó la agudización de un proceso de autoritarismo creciente bajo un régimen democrático, en Chile se trató de un corte abrupto de un gobierno popular. Eso contribuye a explicar el nivel de violencia del golpe chileno y la repercusión internacional que tuvieron las medidas represivas como el bombardeo al Palacio de la Moneda, el encarcelamiento masivo y torturas en el Estadio Nacional o los fusilamientos de opositores. La visibilidad de la represión produjo un rechazo significativo, que transformó al dictador Augusto Pinochet en una figura impopular en el escenario internacional, en alguna medida moderada por la política neoliberal que adoptó su gobierno a partir de 1975, lo que le brindó una fuerte alianza con la primera ministra británica Margaret Thatcher y, más tarde, con el presidente estadounidense Ronald Reagan. La ruptura democrática en los dos países también provocó una oleada de exiliados chilenos, uruguayos y brasileños, parte de la cual se dirigió a la Argentina —en aquel momento la opción democrática más cercana, que presentaba un escenario ilusoriamente promisorio con el retorno de Perón de su exilio en España—. Luego del golpe de 1976, pasarían a ser blancos de la represión en ese país.

Hacia 1975, en el momento de la oficialización de la colaboración represiva entre los países de América del Sur en la Operación Cóndor, Uruguay y Chile llevaban dos años en dictadura, Brasil ya completaba once años de gobierno militar y estaba en una fase declinante de su accionar represivo, mientras Argentina todavía estaba en democracia, aunque en un proceso de ascendente conflictividad y violencia política. Estas diferencias de ritmo contribuyen a comprender el rol que asumió

cada país en la coordinación represiva, en particular el hecho de que Brasil —que se veía como actor protagónico en la región— participara de forma comparativamente reticente. El esperado golpe en Argentina, en el año siguiente (Águila, 2023, p. 51) terminó por sumergir a toda la región en regímenes autoritarios, en un escenario nítidamente distinto al del inicio del ciclo en 1964. Las coyunturas se fueron rápidamente modificando con la sucesión de golpes, con una notable escalada de la ferocidad represiva de un régimen a otro.

El inédito grado de violencia y los métodos adoptados por la dictadura argentina de 1976 no se explican solamente por razones nacionales, si bien un elemento podría ser la frustración de los militares de no haber logrado, en la serie de intervenciones militares que vivió Argentina en el siglo XX, proscribir definitivamente a los grupos políticos de izquierda, en particular los peronistas, a los que imputaban como responsables de los conflictos sociales del país. En el caso de la dictadura brasileña hubo una tendencia “evolutiva” hacia la clandestinidad, con la adopción progresiva del dispositivo desaparecedor a lo largo del tiempo, substituyendo las versiones de suicidio o muerte en combate (Teles, 2010, p. 259). Lo mismo ocurrió en Chile donde, luego de demostraciones públicas en el despliegue de violencia, se pasó a la creación de la División Nacional de Inteligencia (DINA) con un accionar más discreto y clandestino; y en Uruguay, que en 1974 promovió la especialización de la represión política de algunos órganos de las fuerzas armadas, como el Servicio de Informaciones y Defensa (SID) (Slatman, 2016, pp. 473 — 475). En términos regionales, como lo plantean Serra Padrós y Slatman (2014), también se observa esa tendencia. La justificación ofrecida por el dictador argentino Jorge Rafael Videla para la adopción de la desaparición forzada remite justamente al escenario regional, aunque no se refiera nominalmente a la experiencia chilena:

“No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su

momento dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo” (citado en Seoane y Muleiro, 2011, p. 231).

Para evitar la visibilidad pública del fusilamiento, y sus consecuencias en términos de reacciones de la opinión pública —molesta para los golpistas chilenos—, sus homólogos argentinos adoptaron métodos clandestinos de aniquilamiento de los guerrilleros y activistas sociales. Se puede decir que la región se convirtió en una especie de gran campo de experimentaciones represivas¹¹, en el cual Chile y Uruguay pudieron observar el caso brasileño —el golpe en ese país era referido como un ejemplo a ser seguido por los militares chilenos (Simon, 2021), por su rapidez y supuesta ausencia de violencia—, mientras que Argentina contó con un conjunto más amplio de ejemplos en los cuales inspirarse. Otro factor determinante es que el hecho de que la región estaba tomada por dictaduras permitiendo a los militares argentinos un grado mucho más elevado de desenvoltura en términos represivos que sus colegas brasileños, que llegaron al poder cuando en la región solamente el Paraguay estaba bajo el gobierno del dictador Alfredo Stroessner (1954 —1989). Otro ejemplo en esta dirección, además de la elección del método de desaparición forzada de oponentes, fue el trato con los exiliados. Después de haber observado la actuación militante de los grupos de exiliados de los otros países en el exterior, la Junta Militar argentina impidió la salida del país tanto de sus propios ciudadanos cuanto de exiliados extranjeros, adoptando la estrategia de cerrojo, impidiendo el acceso a las embajadas y consulados, bloqueando las fronteras y vías de fuga (Serra Padrós, 2014).

Las confluencias y colaboraciones entre las dictaduras, basadas en una solidaridad ideológica, no borraron, sin embargo, la historia de rivalidades y competencias entre las naciones. El conflicto en torno a los límites y recursos naturales de la región del Canal de Beagle que enfrentó a Chile

11 No todos los experimentos nacionales tuvieron resonancia en los países vecinos. El modelo represivo uruguayo, por ejemplo, tuvo particularidades que se mantuvieron a la escala nacional: un control muy extenso de la población —posible por las dimensiones del país— y la elección de rehenes entre los presos políticos como forma de chantaje para impedir el accionar de las organizaciones guerrilleras

y Argentina, casi condujo a los dos países a la guerra en 1978 y tendría consecuencias en la posición de Chile durante la guerra de las Malvinas, en la década siguiente. La elección en los Estados Unidos de James Carter (1977 – 1981), y la adopción del respeto a los derechos humanos como uno de los puntos principales de su agenda política, fue otro factor de contrariedad: el gran patrono de las dictaduras de la región ahora se volvía contra los regímenes que ayudó a instaurar. Irónicamente, el tan objetado movimiento de los derechos humanos en los Estados Unidos fue en gran medida producto de las dictaduras del Cono Sur, sea por el rechazo que sus políticas represivas provocaron en la opinión pública internacional, sea por el flujo de exiliados que produjo, los que se convertirían en articuladores de la denuncia internacional del autoritarismo en sus países (Green, 2009; Kelly, 2014). La década contrarrevolucionaria terminó con dos hitos conservadores: la Ley de Amnistía de 1979 en Brasil que, pese haber sido un paso decisivo para la apertura democrática —aún le faltaban algunos años más—, constituyó el eje de impunidad de los agentes represivos en este país y se convertiría por décadas en el anclaje de un discurso de pacto de reconciliación nacional (Joffily, 2020), y la promulgación de la Constitución chilena de 1980, que institucionalizó el orden autoritario en el país.

Los ochenta

Los años transcurridos entre el golpe de Estado y la salida democrática en Argentina (1976 – 1983) coincidieron con el período en el cual toda la región estuvo gobernada por dictaduras, si bien cada una de ellas transitaba por diferentes momentos en lo que hace al accionar represivo. En Brasil, el anuncio de una transición “lenta, gradual y segura” se hizo en 1974, aunque la represión haya proseguido su curso al menos hasta diciembre de 1976, cuando un grupo operativo asesinó a miembros del comité central del Partido Comunista de Brasil. El Centro de Informaciones del Ejército, no obstante, permanecería activo y operando junto a los servicios de inteligencia argentinos para capturar militantes clandestinos en Brasil. Hay registros de la captura de al menos siete argentinos entre 1978 y 1980, algunos de los cuales fueron vistos en centros clandestinos en Argentina antes de desaparecer y dos que se suicidaron en el momento de la confrontación con los agentes represivos. De hecho y mientras el régimen militar se dirigía hacia la apertura, Brasil se había convertido de país productor de exiliados en ruta de pasaje para

refugiados de la región que buscaban exilio en países de Europa y en Estados Unidos o, en el sentido inverso, para la operación de retorno a sus países. Lo más curioso en esta articulación de ritmos represivos es que estos operativos conjuntos se producían al mismo tiempo en que los exiliados brasileños volvían al país, tras la Ley de Amnistía de 1979, entre los cuales figuraban importantes personalidades políticas de las izquierdas, proscriptas luego del golpe de 1964. O sea, el mismo país que recibía de vuelta a sus exiliados, colaboraba con otra dictadura para capturar militantes de izquierda clandestinos cuyo destino sería la tortura y la desaparición en sus países natales.

Además de ir a buscar a militantes de izquierda en territorio brasileño, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, la dictadura argentina trató de exportar su *expertise* para países de Centroamérica en una “cruzada hemisférica contra el comunismo”, que incluyó instrucción militar, inteligencia y venta de armas (Armony 2004, p. 320). Ofreció becas para cursos de inteligencia y sobre “lugares de detención temporaria” entre 1978 y 1982, firmó convenios financieros con Guatemala, El Salvador y Honduras —que superaron aquellos ofrecidos por los Estados Unidos en el período—, y entre 1982 y 1983 envió a la aquella región oficiales de alto rango destacados en el área de inteligencia (Rostica, 2020, p. 250 – 251). Dos factores que llevaron a esta presencia militar argentina en esos países fueron el triunfo de la revolución nicaragüense y el giro de la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica en el gobierno de James Carter, que condujo a la suspensión del financiamiento a países que practicaban sistemáticas violaciones a los derechos humanos (Rostica, 2020, p. 252 – 253). Argentina asumió en Centroamérica un rol similar al desempeñado por Brasil en el Cono Sur durante el gobierno de Richard Nixon, alineada con las propuestas del gobierno estadounidense que sucedió a Carter:

“[...] la decisión de la administración Reagan en favor de la acción clandestina como el medio más eficaz de desestabilizar al gobierno sandinista coincidió con el objetivo argentino de organizar secretamente un ejército de cuadros de la guardia nacional de Somoza en el exilio que pudiera realizar operativos guerrilleros dentro del territorio nicaragüense. La convergencia de intereses, sin embargo, no significó que la Argentina pasara a subordinar su auto-

nomía en política exterior a las decisiones estadounidenses. Esta cooperación permitía a ambos países avanzar en sus respectivas agendas” (Armony, 2004, p. 321).

El período de expansión del *savoir faire* represivo argentino, coincidió con el proceso de erosión del consenso en torno a la dictadura. Cuando los militares argentinos declararon guerra a Gran Bretaña —para recuperar las islas Malvinas y con eso buscar reconstituir su base de apoyo social, deteriorada a consecuencia de la crisis económica—, se esperaba que el gobierno de Pinochet, compañero ideológico en la guerra contrasubversiva y aliado geopolítico natural en una confrontación con una potencia europea, se posicionase al lado argentino. No obstante, una convergencia ideológica de otra naturaleza llevó a la dictadura chilena a prestar servicios secretos al gobierno de Margaret Thatcher, mientras sostenía un discurso de neutralidad: la afinidad neoliberal.

Aislada en la esfera internacional —a causa de la extrema violencia contra el derrocado gobierno de la Unidad Popular, que provocaron rechazo y condena además de la suspensión de ayuda económica, incluso por parte de países del bloque occidental—, la dictadura chilena buscó establecer una alianza con Gran Bretaña. Electa en 1979, Thatcher entró en confrontación abierta con los sindicatos obreros británicos, adoptando “un programa de privatizaciones y recortes, inspirado por recetas neoliberales y monetaristas” (Santoni y Sánchez, 2022, p. 405). Seguía la ruta tomada a partir de 1975 por el gobierno de Pinochet que, con los *Chicago Boys* en la dirección económica, apostó en la receta neoliberal como el fundamento ideológico, político y económico de un proyecto refundacional de la sociedad chilena (Casals y Estefane, 2021).

El estallido de la guerra de Malvinas sucedió en el periodo cúspide de las buenas relaciones entre la dictadura chilena y el gobierno británico, pocos años después de que el conflicto del canal de Beagle casi condujo a un enfrentamiento militar entre Chile y Argentina. La dictadura de Pinochet buscó contemporizar entre las dos lealtades:

“Chile mantuvo formalmente la neutralidad e incluso ocupó públicamente un discurso proargentino, su posición en la OEA (Organización de los Estados Americanos) fue la de no apoyar

a las solicitudes de Buenos Aires para obtener el apoyo de los países miembros. Más aun, se estableció un pacto secreto, negociado por Matthei, según el cual los chilenos se comprometieron a informar sobre movimientos argentinos, permitieron el uso de apoyo logístico y de puertos a los británicos y hasta desplazaron fuerzas en los confines con el país vecino para obligar a los argentinos a reorientar tropas» (Santoni y Sánchez, 2022, p. 408).

La victoria británica reforzó el liderazgo de Thatcher y produjo dos consecuencias diametralmente opuestas en el escenario de las dictaduras del Cono Sur. En el caso de Argentina precipitó el fin del régimen autoritario, con la desmoralización de las fuerzas armadas por su incapacidad de hacer frente a los británicos y por las denuncias acerca de los errores en el curso de la guerra, la corrupción y el tratamiento infligido a los conscriptos durante el conflicto. En el de Chile dio nuevo aliento a Pinochet, a quien el experimento neoliberal, en aquel momento adoptado por las dos principales potencias occidentales —la Gran Bretaña de Thatcher, desde 1979, y los EE. UU. de Ronald Reagan, a partir de 1981—, brindó poderosos aliados. El vanguardismo chileno en la adopción del tratamiento de *shock* en la economía, con profundos efectos en el tejido social de país y cambios estructurales en las relaciones Estado — sociedad, no solamente fue fundamental en el proceso de elaboración del concepto de neoliberalismo (Casals y Estefane, 2021), sino que aseguró una especie de modernidad al país cuando el proceso de transición a la democracia de las naciones vecinas transformó a la dictadura chilena en un fenómeno político “obsoleto”. Ese aspecto contribuye a explicar cómo la dictadura chilena pudo sostenerse por tanto tiempo en una región que se movía hacia la democratización, cuando se aisló a tal punto en la esfera internacional que incluso para el gobierno conservador de Ronald Reagan se volvió, en algunas ocasiones, políticamente problemático apoyar a Pinochet (Kornbluh, 2013, p. 425).

Argentina, a su vez, asumiría en la región la vanguardia del proceso transicional. Derrocada la dictadura, los trabajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1983 y, sobre todo, la realización del Juicio a las Juntas militares en 1985, constituyeron un proceso al mismo tiempo singular y de gran repercusión. En Brasil hubo cierto temor a una “argentinización” de su proceso transicional (Bauer,

2016), aun cuando la Ley de Amnistía de 1979 protegía a los represores sin siquiera mencionarlos, y era considerada por los militares y sectores conservadores y liberales de la sociedad civil como un pacto social necesario a la reconciliación nacional. Un temor infundado, puesto que ni el masivo movimiento popular de 1984 por las elecciones directas tuvo éxito. La singularidad argentina tampoco afectó a Uruguay donde, tras la transición, el tema de la responsabilización de los represores fue sometido a la ciudadanía por un plebiscito en 1989, optándose por la impunidad. Tampoco en Chile, donde la dictadura seguiría hasta 1990.

No se puede negar que las dictaduras del Cono Sur tuvieron un alto grado de eficacia en la destrucción de las organizaciones de izquierda y lograron la desarticulación por algunos años de los movimientos estudiantiles y sindicales. Pero más que todo triunfaron en remover el proyecto revolucionario, tal como se presentaba en los años sesenta y setenta, del horizonte de alternativas políticas. Por otro lado, los represores —con grados muy distintos en cada país— pagaron un precio por sus triunfos: incluso en Brasil, donde imperó la total impunidad, se sintieron derrotados en la guerra de la memoria, alejados del reconocimiento social por parte de los civiles a los que creían haber salvado del comunismo y recelosos que, ante cualquier cambio de los vientos políticos, sus actos fueran juzgados en los tribunales.

Consideraciones finales

Avanzar en la comprensión de las dictaduras militares de los años 1960 — 1980 y, en particular, de sus dinámicas represivas —sus aparatos, dispositivos, prácticas y actores— como un fenómeno a escala regional a la vez que anclado en las trayectorias nacionales de más largo plazo, es una operación que tiene un amplio potencial explicativo, no solo para dar cuenta de aquello que tienen en común sino también de sus particularidades.

Como se ha afirmado, las escalas de análisis no son neutras y tampoco están definidas de antemano (Jensen y Lastra, 2012), sino que las mismas constituyen una elección del investigador/a, vinculada con sus preguntas, su objeto de estudio, las dimensiones a indagar, las fuentes con las que cuenta, etc., a la vez que estos elementos muchas veces definen los contornos temporales y espaciales del objeto estudiado. Así, mientras

los análisis a escala más micro —locales, regionales— de las dictaduras y la violencia estatal han permitido superar visiones generalizadoras, visibilizar actores, tramas sociales y lógicas políticas poco analizadas, tanto como modalidades, prácticas y efectos de la represión y poner en debate cronologías y formas canónicas de interpretar aquellos procesos históricos; otros objetos de estudio —como los exilios políticos, el movimiento de derechos humanos o la coordinación de la represión— han mostrado la necesidad de desplazar el foco de lo estatal — nacional hacia una escala regional, internacional o transnacional, para dar cuenta de la actuación de sujetos y redes en distintos escenarios, las conexiones y la circulación de ideas, doctrinas y prácticas contrasubversivas, que se desenvuelven en sus propios tiempos y espacios y por ende no son reductibles al análisis desde dinámicas estrictamente nacionales o locales. Por su parte, las perspectivas comparadas y conectadas entre dos o más casos de análisis —y más allá de las reticencias aún visibles en la historiografía de nuestros países— han permitido iluminar tanto lo que comparten como sus singularidades, matices y variaciones, contribuyendo a una comprensión más densa de los fenómenos analizados.

Emprendimientos de este tipo involucran desafíos metodológicos, que resultan posibles de acometer, entre otras razones, por los consistentes avances en las investigaciones y la acumulación de conocimiento disponible, tanto como por la colaboración entre especialistas que conocen en profundidad los distintos casos nacionales analizados. Este trabajo ha procurado mostrar las potencialidades que posee la articulación de variadas escalas temporales y espaciales: mientras la vecindad geográfica y la coetaneidad de las dictaduras del Cono Sur habilitan el análisis comparado y, como se ha dicho, la detección de rasgos comunes y especificidades; de otra parte, poner el foco en la cronología permite registrar los cambios en un lapso de tiempo no demasiado extenso, pero con diferencias notables entre los distintos subperíodos, así como las influencias y contra — influencias entre las dictaduras militares.

Bibliografía

Águila, G. (2021). La dictadura, las formas de la represión y los estudios a escala local. *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, 21(1).

Águila, G. (2023). *Historia de la última dictadura militar: Argentina, 1976–1983. Siglo XXI*.

Águila, G., & Joffily, M. (2023). Acciones represivas y violencia estatal. En D. Lvovich & R. Patto Sá Motta (Eds.), *Las dictaduras argentina y brasileña en acción: Violencia represiva y búsqueda de consentimiento*. UNGS/UFMG.

Alonso, L. (2022). *Que digan dónde están: Una historia de los derechos humanos en la Argentina*. Prometeo.

Armony, A. (2004). Transnacionalizando la “guerra sucia”: Argentina en Centroamérica. En D. Spenser (Ed.), *Espejos de la guerra fría: México, América Central y el Caribe*. CIESAS.

Bauer, C. S. (2016). O perigo da “argentinização” da transição política brasileira: Uma visão sobre a Argentina no Brasil de 1984 e 1985. *Alheteia*, 7(13).

Bohoslavsky, E., Franco, M., Iglesias, M., & Lvovich, D. (Comps.). (2010). *Problemas de historia reciente del Cono Sur* (Vols. 1–2). Prometeo/UNGS/UNSAM.

Casals, M., & Stefane, A. (2021). El “experimento chileno”: Las reformas económicas y la emergencia conceptual del neoliberalismo en la dictadura de Pinochet (1975–1983). *História Unisinos*, 25(2).

Chirio, M., & Joffily, M. (2020). Circulaciones transnacionales de represores brasileños. En G. Águila, S. Garaño & P. Scatizza (Coords.), *La represión como política de Estado: Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX*. Imago Mundi.

Fernández Barrio, F. (2022). El despliegue transnacional del aparato represivo argentino durante la última dictadura militar: Un estado de la cuestión. *Revista Universitaria de Historia Militar*, 11(23).

Fernández Barrio, F., & González Tizón, R. (2020). De la ESMA a Francia: Hacia una reconstrucción histórica del Centro Piloto de París (1977–1979). *Folia Histórica del Nordeste*, 28.

Fico, C. (2008). Os golpes de 1964 e 1966 no Brasil e na Argentina e o papel dos Estados Unidos. En *Anais do Seminário Internacional Ditadura e Democracia na América Latina: Balanço histórico e perspectivas*. Fundação Getúlio Vargas.

Franco, M., & Iglesias, M. (2015). El estado de excepción a escala comparada: Notas a partir de los casos argentino, chileno y uruguayo. *Quinto Sol*, 19(1).
 Gaspari, E. (2003). *A ditadura derrotada*. Companhia das Letras.

Gomes, G. (2016). *La política social de los regímenes dictatoriales en Argentina y Chile, 1960–1970*. UNGS/UNLP/UNaM.

Gorender, J. (1998). *Combate nas trevas*. Ática.

Green, J. (2009). *A pesar de você*. Companhia das Letras. Jelin, E., et al. (2002–2005). *Memorias de la represión* (Vols. 1–10). Siglo XXI.

Jensen, S. (2021). Los exilios políticos argentinos como objeto historiográfico: Diálogos inconclusos con la historia política y la historia reciente. *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”*, 21(1).

Jensen, S., & Lastra, M. S. (2015). El problema de las escalas en el campo de estudio de los exilios políticos argentinos recientes. *Avances del Cesor*, 12(12).

Joffily, M. (2018). A política externa dos EUA, os golpes no Brasil, no Chile e na Argentina e os direitos humanos. *Topoi*, 19(38).

Joffily, M. (2020). A (auto)anistia brasileira: O presente pretérito. En T. de A. Maia & A. S. Fernandes (Eds.), *Anistia: Um passado presente?* Edipucrs.

Kelly, P. W. (2014). “Magic words”: The advent of transnational human rights activism in Latin America’s Southern Cone in the long 1970s.

Kornbluh, P. (2013). *The Pinochet file*. The New Press.

Lastra, M. S. (2022). Dictaduras y retornos del exilio: Chile y Argentina en perspectiva comparada. *Clepsidra: Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*, 4(7).

López Chirico, S. (1995). *Uruguai 1985–1993: Estratégia e tática da reprodução institucional militar no pós-ditadura* (Tesis de posgrado). Universidade de Campinas.

Lvovich, D. (2020). La violencia dictatorial y la violencia estatal de largo plazo en el Cono Sur de América Latina: Entre lo excepcional y lo habitual. *História: Questões & Debates*, 68(1).

Lvovich, D. (2023). Autoritarismo, nacionalismo, fascismo y doctrina de la seguridad nacional sobre las dictaduras del Cono Sur latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. *Fuegia: Revista de Estudios Sociales y del Territorio*, 6(2).

Lvovich, D., & Patto Sá Motta, R. (Eds.). (2023). *Las dictaduras argentina y brasileña en acción*. UNGS/UFMG.

Martins Filho, J. R. (1996). *O palácio e a caserna: A dinâmica militar das crises políticas na ditadura (1964–1969)*. Ed. UFSCar.

O'Donnell, G. (1996). *El Estado burocrático autoritario: Triunfos, derrotas y crisis*. Editorial de Belgrano. (Trabajo original publicado en 1982).

O'Donnell, G. (1997). *Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Paidós.

Ramírez, H., & Franco, M. (Eds.). (2021). *Ditaduras no Cone Sul da América Latina: Um balanço historiográfico*. Civilização Brasileira.

Rapoport, M., & Laufer, R. (2000). Os EUA diante do Brasil e da Argentina: Os golpes militares da década de 1960. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 43(1).

Rollemberg, D. (1999). *Exílio: Entre raízes e radares*. Record.

Rostica, J. C. (2020). La coordinación represiva entre Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador (1976–1983): Avances, dificultades y desafíos. En G. Águila, S. Garaño & P. Scatizza (Eds.), *La represión como política de Estado*. Imago Mundi.

Santoni, A., & Sánchez, S. (2022). Los “amigos de Chile”: El régimen de Pinochet y la Gran Bretaña de Thatcher (1979–1988). *Revista de Historia*, 29(1).

Scatizza, P. (2016). *Un Comahue violento: Dictadura, represión y juicios en la Norpatagonia argentina*. Prometeo.

Seoane, M., & Muleiro, V. (2011). *El dictador: La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*. Delbolsillo.

Serra Padrós, E. (2014). O Uruguai como alvo da ditadura brasileira de segurança nacional. *Revista Maracanan*, 11.

Serra Padrós, E., & Simões, S. (2013). A ditadura brasileira e o golpe de Estado chileno. *Outros Tempos*, 10(16).

Serra Padrós, E., & Slatman, M. (2014). Brasil y Argentina: Modelos represivos y redes de coordinación durante el último ciclo de dictaduras del Cono Sur. En S. Jensen & M. S. Lastra (Eds.), *Exilio, represión y militancia: Nuevas fuentes y nuevas formas de abordaje de los destierros de la Argentina de los años setenta*. Edulp.

Silva, V. G. (2023). O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na América do Sul. *História Social*, 18.

Simon, R. (2021). *O Brasil contra a democracia*. Companhia das Letras.

Slatman, M. (2016). El Cono Sur de las dictaduras, los eslabonamientos nacionales en el interior de la Operación Cóndor y las particularidades del caso argentino. En G. Águila, S. Garaño & P. Scatizza (Coords.), *Represión estatal y violencia paraestatal: Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado*. FaHCE.

Teles, J. de A. (2010). Os familiares de mortos e desaparecidos políticos e a luta por “verdade e justiça” no Brasil. En E. Teles & W. Safatle (Eds.), *O que resta da ditadura: A exceção brasileira*. Boitempo.